



SENTENCIA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta de marzo del año dos mil veintitrés.

VISTOS para resolver en definitiva los autos originales del expediente número **RO/209/22**, instruido en contra del presunto responsable [REDACTED], quien al momento de los hechos denunciados se desempeñaba como [REDACTED] por la presunta comisión de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el del artículo 88 fracción IV de la Ley Estatal de Responsabilidades y:

ANTECEDENTES:

1. El catorce de noviembre del año dos mil veintidós, se recibió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentado por la Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, en contra del presunto responsable (**páginas de la 1 a la 13**), mismo que se tuvo por admitido el dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós (**páginas de la 81 a la 85**), ordenándose emplazar formal y legalmente del presunto responsable, lo que aconteció el veintidós de noviembre de dos mil veintidós (**páginas de la 87 a la 97**).

CONTRALORIA GENERAL
de Sustancia
de Responsabilidades

2. El doce de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia inicial en el procedimiento en que se actúa, haciéndose constar la **incomparecencia** del encausado (**páginas de la 117 a la 120**) y derivado de dicha incomparecencia, se tuvieron por ofrecidas las pruebas solo a la denunciante, se declaró cerrado el término para ofrecer las pruebas, en atención a lo dispuesto por el artículo 248, fracciones V y VII de la Ley Estatal de Responsabilidades, mismas que fueron admitidas en auto dictado el dieciocho de enero del año dos mil veintitrés (**páginas de la 131 a la 134**).

3. Desahogadas las pruebas admitidas y al no existir alguna pendiente de desahogar, mediante auto del uno de febrero de dos mil veintitrés (**página 135**), se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Hecho lo anterior, esta autoridad resolutora declaró visto el proceso y citó la causa a oír sentencia definitiva, misma que ahora se pronuncia:

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA

Esta Coordinación Ejecutiva es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto por el artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación en los artículos 3, fracciones IV y XXV de la Ley Estatal de Responsabilidades; 26 apartado C, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 11 fracción I, del

Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

II. HECHOS CONTROVERTIDOS

Se advierte que la autoridad investigadora formuló Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por los hechos en él señalados (**páginas de la 01 a la 13**), los cuales consisten medularmente en que el presunto responsable, omitió rendir su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación dos mil veintiuno, en tiempo y forma, a pesar de estar legalmente obligado para ello, hecho el cual la autoridad investigadora calificó como falta administrativa no grave, prevista por el artículo 88, fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Síntesis de hechos que se realiza en aplicación por analogía de la Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”¹**

Por su parte [REDACTED] no compareció a la **audiencia inicial** (páginas de la 117 a la 120), aun cuando fue emplazado personalmente para ello (páginas de la 87 a la 97), en los precisos términos indicados por los artículos 248 fracciones II y III de la Ley Estatal de Responsabilidades; 39 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y 171 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia administrativa que nos ocupa, no se vertieron entonces, argumentos de defensa, quedando sólo a su favor, la **presunción de inocencia** que la Ley le otorga en los artículos 151 y 175 de la aludida Ley Estatal de Responsabilidades.

Ahora bien, como se advierte de los antecedentes de esta sentencia y acatando el derecho de audiencia consagrado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como también el contenido del artículo 248 fracciones III, V y VII de la Ley Estatal de Responsabilidades, esta Coordinación Ejecutiva, respetó en su integridad el derecho a una debida defensa del encausado, al hacerle saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa; así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas a su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare; dándole a conocer que las imputaciones en su contra, derivan de los hechos consignados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (páginas de la 1 a la 13) y sus anexos (páginas de la 15 a la 79), con las cuales se le corrió traslado en la diligencia de emplazamiento.

Del mismo modo, se respetó el debido proceso, previsto en el artículo 130 de la Ley Estatal de Responsabilidades y enmarcado como un principio universal reconocido en

¹ Cfr. *Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital: 164618, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. /J. 58/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página 830, Tipo: Jurisprudencia.*

nuestro sistema jurídico, integrado y armonizado al mismo, al ser reconocido en los instrumentos internacionales ratificados por México y parte del sistema internacional de derechos humanos, por las consideraciones que en adelante se explican; lo anterior, en reconocimiento al principio del debido proceso como garante de la legalidad y la correcta aplicación de las leyes en el marco del respeto a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso (incluyendo el administrativo disciplinario); de tal forma, que constituye uno de los presupuestos indispensables para el sistema de protección de los derechos humanos y su efectividad.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que el debido proceso "...abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial..."; señalando que su aplicación "...no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, 'sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales' a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos...", lo que implica que la actuación de los órganos estatales dentro de un proceso jurisdiccional o de cualquier naturaleza, se realice en condiciones de igualdad.

De tal manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del caso Cabrera y Montiel Flores Vs. México, del veintiséis de noviembre del dos mil diez, estableció que: "...140. El artículo 8.1 de la Convención consagra los Lineamientos del llamado 'debido proceso legal', que implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la Ley para la determinación de sus derechos..."

En ese tenor, es aplicable la Tesis número 1a. XIII/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 650, Libro V, Febrero 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente:

"...

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho Tribunal Internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta

obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutive de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas...

Es de precisarse que el debido proceso se instrumentaliza en el procedimiento mediante las formalidades esenciales reconocidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conlleva los siguientes parámetros mínimos:

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas.
3. La oportunidad de alegar.
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y;
5. Acceso a un recurso efectivo.

Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número 1.a/J.11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 28 Febrero del 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro número 2005716, misma que a la letra dice:

“...
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."**, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su

detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

En ese orden de ideas, se tiene que, en el caso que nos ocupa, se cumplió cabalmente con el debido proceso, establecido en el artículo 130 de la Ley Estatal de Responsabilidades, al obrar dentro del presente expediente, constancias que acreditan el debido emplazamiento personal de [REDACTED], acaecido el veintidós de noviembre de dos mil veintidós (**páginas de la 87 a la 97**), emplazamiento personal, a través del cual, se hizo de su conocimiento, entre otras cosas, los señalamientos de responsabilidad y hechos imputados en su contra, consignados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y anexos (fojas de la 01 a la 79); se le corrió traslado con copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente; de igual forma, se hizo de su conocimiento el derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia; y, se le enteró, que de no contar con un defensor, le sería asignado un defensor de oficio; se hizo de su conocimiento, su derecho de ofrecer pruebas y también de alegar lo que sus intereses conviniera; asimismo, se citó a [REDACTED], señalándosele hora, fecha y lugar ciertos para que compareciera al desahogo de la **audiencia inicial** a su cargo, prevista por el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades.

No obstante, esta autoridad no pasa desapercibido, que con posterioridad al cierre del período para ofrecer pruebas durante el desahogo de la audiencia inicial (celebrada a las diez horas del doce de diciembre de dos mil veintidós) mencionada en párrafos anteriores; a las diez horas con treinta y siete minutos del mismo día de la celebración de la mencionada audiencia, el [REDACTED], presentó escrito y anexos respectivos (páginas de la 121 a la 127) ante esta Coordinación Ejecutiva, **lo cual** consta con sello de recibido de esta autoridad, mediante el cual realizó diversas manifestaciones, escrito que se atendió a través del auto de doce de enero de dos mil veintitrés (páginas de la 129 a la 130), en el que se determinó que se estuviese a lo decretado en la aludida audiencia, siendo esto lo que a la letra dice: **“se tiene por cerrado el termino para realizar sus declaración por escrito o verbalmente, así como el ofrecimiento de las pruebas que estime necesarias para su defensa, lo anterior en observancia del artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades.”**

En virtud de lo anterior, y por las determinaciones establecidas durante el desahogo de la audiencia inicial que nos ocupa, esta resolutoria al resolver la presente causa: I.- No se encuentra en posibilidades de tomar en cuenta las manifestaciones y pruebas ofrecidas por el encausado, pues estas últimas no encuadran en los supuestos que enmarcan la calidad de pruebas supervenientes, siendo estas las únicas que pudieran ser ofertadas y su caso admitidas con posterioridad al desahogo de la audiencia inicial.

No está demás precisar, que para que esta autoridad estuviese en aptitud de considerar las manifestaciones y pruebas en cuestión al resolver la presente causa, estas debieron ser ofrecidas antes o durante la celebración de la audiencia inicial llevada a cabo a las **diez horas del doce de diciembre de dos mil veintidós**; lo anterior así, por ser formalmente una carga procesal de las partes, según lo dispone el ordenamiento jurídico que rige el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, siendo este Ley

Estatal de Responsabilidades, específicamente lo establecido en las fracciones V I del artículo 248 de la ley en cita².

III. ESTUDIO DE FONDO

La Autoridad Investigadora denunció por la falta administrativa prevista en el artículo 88, fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades, preceptos normativos que a la letra dicen:


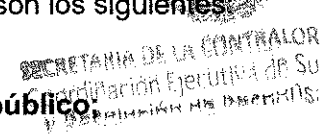
“Artículo 88.- *Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*

(...)

IV.- *Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por esta Ley y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales;”*

En ese sentido, tenemos que, comete una falta administrativa no grave, el servidor público que dejare de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por la Ley Estatal de Responsabilidades y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales.

Así, los elementos que integran la falta administrativa en cita son los siguientes:

- 
- 
- a) **Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público.**
 - b) **Que tenga la obligación de presentar su declaración patrimonial y**
 - c) **Que haya incumplido en el tiempo y forma establecida para la presentación de tal declaración.**

El **primer elemento** se acredita con las **DOCUMENTALES PÚBLICAS** agregada a autos, consistentes en: original de **CONSTANCIA DE SERVICIOS** de siete de diciembre de dos mil veintiuno (**página 45**) .Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades. **Lográndose acreditar con ello, el carácter de servidor público del presunto responsable.**

El **segundo elemento** en relación con los artículos 33 y 34, fracción III, de la Ley Estatal de Responsabilidades, **se acredita** con la **DOCUMENTAL PÚBLICA** consiste en el oficio número **CGOIC-109-2021** y anexos, suscrito por la Coordinadora General de Órganos

² **“artículo 248.-** *En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:*

[...]

V.- *El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; [...]*”

Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General (páginas de la 23 a la 29), mediante el cual remite a la Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud Pública, el listado de los servidores públicos omisos de esa dependencia, listado dentro del cual, se encuentra el nombre del presunto responsable quien fue omiso en presentar la declaración de modificación dos mil veintiuno. Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En este tenor, los artículos 33 y 34, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades, a la letra dicen:

“Artículo 33.- *Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.”*

“Artículo 34.- *La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:*

(...)

II.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año;

(...)

A GENERAL
tañiciación
allegados

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.

(...)

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley.

Para el caso de omisión, en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría o los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en la presente ley.”

Acuerdos por los que se tiene como causa justificada, la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 y 39 de la Ley Estatal de Responsabilidades, por la Emergencia Sanitaria derivada de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) publicados en los Boletines Oficiales del Estado de Sonora, número 43, Secc. I del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno y número 9, Secc. II del veintinueve de julio de ese mismo año.

De forma que, es válido sostener que era obligación de todo servidor público el presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de

modificación 2021, del primero de mayo al treinta de septiembre del dos mil veintiuno, lo anterior, tomando en cuenta la ampliación del plazo de presentación, derivado de los Acuerdos por los que se tiene como causa justificada, la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 y 39 de la Ley Estatal de Responsabilidades, por la Emergencia Sanitaria derivada de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) publicados en los Boletines Oficiales del Estado de Sonora, número 43, Secc. I del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno y número 9, Secc. II del veintinueve de julio de ese mismo año.

En este tenor, el presunto responsable tenía la obligación como servidor público de presentar su declaración de modificación 2021, **entre el primero de mayo y el treinta de septiembre de dos mil veintiuno.**

El **tercer elemento**, consistente en el **incumplimiento** del presunto responsable con la obligación antes precisada, quedó debidamente **acreditada** en autos del expediente.

Lo anterior es así, en virtud de las **DOCUMENTALES PÚBLICAS** consistentes en oficio **CGOIC-109-2021**, que contiene anexo el oficio número **CESRRSP/02947/2021 (página 27)**, del trece de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el entonces Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de esta Secretaría, mediante el cual remite el listado de los servidores públicos omisos de los Servicios de Salud del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud Pública, listado en el que se encuentra el nombre del presunto responsable, quien fue omiso en presentar la declaración de modificación dos mil veintiuno; **teniendo que la autoridad en cita, informó a la Coordinadora General de Órganos Internos de Control que entre otros, el presunto responsable había incumplido con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, lo cual motivó el origen de la indagatoria correspondiente.** Documentales que merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Es por lo anteriormente vertido que, la autoridad investigadora **requirió** al presunto responsable el cumplimiento a su obligación mediante oficio número **OIC-SSS-DJ-120-2022 (página 49)**. Actuación que merece valor probatorio pleno al ser **DOCUMENTAL PÚBLICA** y ser generada por una autoridad con motivo de sus funciones en términos de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Requerido que fue el presunto responsable para el cumplimiento de su obligación, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, presentó de forma extemporánea en el Sistema Declaranet, la declaración de **MODIFICACIÓN SIMPLIFICADA 2021 (página 53)**; prueba documental con la que se acredita, que el encausado no presentó la citada declaración en el tiempo y forma establecidos legalmente. Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En consecuencia, se estiman **acreditados los elementos** de la falta administrativa no grave consistente en incumplir con la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, toda vez que la autoridad investigadora demostró que el presunto responsable, en su carácter de servidor público, estaba obligado legalmente a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, entre el **uno de mayo del año dos mil veintiuno al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno** y fue omiso en presentarla en tiempo y forma, pues no fue hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, cuando éste la presentó, en términos de lo establecido por el artículo 34, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Luego, al no obrar alguna probanza a favor del presunto responsable y al haberse superado la presunción de inocencia del mismo prevista en el artículo 175 de la Ley Estatal de Responsabilidades y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, de acuerdo al artículo 171 de la ley en cita, es claro que la **conducta imputada quedó plenamente acreditada**.

En consecuencia, se tiene por acreditada la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 88 FRACCIÓN IV DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES**.

IV. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN



SECRETARÍA GENERAL
de la Función Pública
Responsabilidad

Acreditada que fue la existencia de una falta administrativa no grave y la responsabilidad del presunto, para efecto de determinar la sanción que corresponde, se debe acudir al artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, mismo que a la letra dice:

“Artículo 116.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, además de acreditarse todos los elementos subjetivos, objetivos y normativos, cuando la conducta lo exija, respecto de las faltas administrativas descritas en esta ley, se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

- I.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio;
- II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y
- III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano Interno de Control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.”

El artículo en cita contempla los factores que han de considerarse para la individualización de la sanción, en atención a ello:

Respecto de los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, de las constancias se advierte que el

responsable ostentó el cargo de [REDACTED]

[REDACTED] SALUD PÚBLICA.

Con relación a la **fracción I**, se advierte que el cargo del responsable era [REDACTED] y que tenía una [REDACTED] en el servicio público; **elemento este último que le perjudica**, al ser nivel operativo con suficiente tiempo en el servicio público, para conocer las obligaciones que tiene que cumplir en el ejercicio de su función.

Con relación a la **fracción II**, atiende a las condiciones exteriores y los medios de ejecución de la infracción, ésta la constituyó la omisión que ya antes ha sido acreditada, **por tanto le perjudica**.

Atendiendo la **fracción III**, relativa a la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, esta Resolutora advierte que en la base de datos del Sistema de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales, que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva, no existen antecedentes de sanciones firmes del mismo tipo de responsabilidad administrativa, instruidos en contra del servidor público responsable, **por lo que no le perjudica**.

De todo lo antes señalado, se advierte que **existen tres elementos que le perjudican al individualizar la sanción**.

Ahora, el artículo 115 de la Ley Estatal de Responsabilidades prevé por la **comisión de Faltas Administrativas No Graves**, las siguientes sanciones:

"Artículo 115.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos Internos de Control impondrán las sanciones administrativas siguientes:

- I.- Amonestación pública o privada;
- II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión;
- III.- Destitución de su empleo, cargo o comisión; y
- IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La Secretaría y los Órganos Internos de Control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año."

De forma que, considerando la mínima y la máxima de la sanción a imponer por la omisión atribuida, habiendo valorado los elementos de prueba que fueron aportados al procedimiento que se ventila y tomando en cuenta los factores establecidos en el artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, esta autoridad estima justo y equitativo,

imponer la sanción de **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, en contra del responsable, lo anterior de conformidad con la fracción I del artículo 115 de la citada Ley Estatal de Responsabilidades.

V. FALLO

De la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, quedó plenamente acreditado que el presunto es responsable de cometer la **Falta Administrativa No Grave** prevista en el **Artículo 88, fracción IV** de la Ley Estatal de Responsabilidades; por lo tanto, se determina imponerle la sanción de **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, previstas en la fracción I del artículo 115 de la citada Ley Estatal de Responsabilidades.

VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con relación a los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente sentencia suprimiendo los datos personales del responsable, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación similar, para que sus precitados datos personales puedan difundirse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve al tenor de los siguientes:

SECRETARÍA GENERAL
de Sustanciación
de Responsabilidades

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es y fue competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando I de esta sentencia.

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el considerando III de la presente sentencia, en autos quedaron plenamente acreditados los elementos de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 88 FRACCIÓN IV DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES**, así como la plena responsabilidad de [REDACTED] en su comisión; consecuentemente, se decreta la **EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** en su contra.

TERCERO. Se le aplica al responsable la sanción de **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, de conformidad con los artículos 115 fracción I y 116 de la Ley de la Materia, con relación al considerando IV de este fallo.

CUARTO. Se informa al responsable que, en caso de reincidencia, se le impondrá una sanción mayor a la antes establecida, de conformidad con el último párrafo del artículo

116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, el cual define la reincidencia como la comisión de una infracción del mismo tipo de otra ya cometida.

QUINTO. Se hace del conocimiento al responsable que la presente sentencia puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 250 de la Ley Estatal de Responsabilidades y que para ello cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

SEXTO. En su oportunidad, previa ejecutoria de la presente sentencia, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente, archívese el presente expediente como asunto total y absolutamente concluido.

NOTIFÍQUESE con copia de la presente sentencia al responsable mediante notificación personal, en el domicilio señalado para tal efecto, comisionándose para tal diligencia a los notificadores y a los testigos de asistencia quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación.

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Unidad Administrativa. Lo anterior con fundamento en el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, en relación con el artículo 158 de la Ley Estatal de Responsabilidades, aplicado de manera supletoria al procedimiento que nos ocupa.

Así lo resolvió y firma el **Dr. Oswaldo Pacheco Camacho**, Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, ante los testigos de asistencia, con los que actúa y quienes dan fe. **DAMOS FE.-**

SECRETARÍA GENERAL
de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades

DR. OSWALDO PACHECO CAMACHO

Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades
de la Secretaría de la Contraloría General



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades

LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES

LIC. GILDARDO MARTÍN MONTAÑA PIÑA.

Lista.- El 31 de marzo del 2023, se publica en Lista de Acuerdos la Sentencia que antecede. Conste.-